

plaza pública para la edición del 10 de noviembre de 1992
% Elecciones discutidas
% Tamaulipas y Sinaloa
miguel ángel granados chapa

Los procesos electorales no concluyen el día en que se recibe el voto de los ciudadanos. Esa lección elemental de derecho público tiene, en México, no sólo el sentido de que luego de la jornada electoral siguen los cómputos y la calificación, sino que dadas ciertas circunstancias se generan también secuelas marcadas por diversas suertes de insurrección civil. De ese modo, más que en Puebla, en Tamaulipas y Sinaloa apenas estamos entrando en la difícil fase final del proceso para sustituir a los gobernadores Américo Villarreal y Francisco Labastida Ochoa.

Las condiciones de ambas entidades son diversas. En Tamaulipas se plantea el conflicto de manera más aguda, porque la oposición consiguió presencia derivada de que dos partidos, el PAN y el PRD, se coaligaron para presentar la candidatura de Jorge Cárdenas González, un ex parmista que atrajo a su postulación a un importante número de sus antiguos correligionarios. Alcalde de Matamoros, cuando se vio que sus posibilidades crecían se le quiso intimidar, y detener en su aspiración política, mediante la amenaza de un juicio político, por presunta desviación de fondos. Fue tan absurda la maniobra que se hizo obligado desmontarla, para que no resultara favorable a la víctima ~~buscada~~. Por la importancia de la movilización obtenida, se diría que la situación tamaulipeca pudiera asemejarse a la de entidades donde el candidato declarado triunfante no pudo sentarse a gobernar. Pero en ninguno de los casos en que tal desenlace se ha producido estaba presente ningún miembro del círculo salinista más estrecho. Algo se acercaba a esa zona Ramón Aguirre, pero era más amigo del ex presidente De la Madrid que de su sucesor. En cambio, en Tamaulipas, el candidato priísta goza del afecto del Presidente Salinas, que ha impulsado su carrera, al punto de convertirlo el año pasado en virtual gobernador. Lo era no sólo por la dimensión de las finanzas que manejaba, las del Pronasol, sino por las deplorables características del gobernador formal, que ha sido omiso en la mayor parte de las áreas confiadas a su gobernación, y ha cometido errores sobresalientes en los escasos caminos administrativos que ha recorrido. La cuestión en Tamaulipas, entonces, consiste en saber cuán intensa y permanente tiene que ser la movilización ciudadana contra un gobernador cuya característica distintiva es su proximidad con el Ejecutivo federal.

Cuando el Presidente Salinas reunió a los priístas que gobiernan y aspiran a gobernar, el 21 de octubre, enumeró tres causas por las cuales quedarían en riesgo de perder los



plaza/2

10/xi/92

puestos que ocupan o pretenden ocupar: alejamiento del pueblo, patrimonialismo e incapacidad. No se refirió en cambio, a la gran salvaguarda que acaso beneficie a los que, incurriendo en alguna de esas causales de despido, sea puesto en jaque por la oposición, que es la amistad presidencial misma. Es seguro que esa peculiaridad dará a los candidatos colocados en situación difícil, por lo menos una más prolongada capacidad para resistir.

Es distinta, en su perjuicio, la situación del candidato triunfante en Sinaloa, Renato Alvarado. No sólo no es amigo personal del Presidente, sino que ni siquiera se ubica en la corriente modernizadora que encabeza el huésped principal de Los Pinos. Lo beneficiará, en cambio, que la oposición no se ha unificado allí, y que la movilización panista se localiza en dos de las grandes ciudades sinaloenses --Culiacán y Mazatlán--, aunque aparezcan brotes significados en otros lugares. Emilio Goicoechea, el candidato panista, sin arraigo suficiente en el puerto mencionado, dista de ser el caudillo que, en Tamaulipas, se encarna en la compleja personalidad de Cárdenas González. Al contrario, es previsible que si sus impugnaciones no gozan de fortuna, se retire a sus negocios, en vez de encabezar una lucha de suerte incierta, que supone desgastes y aun sacrificios.



No puede tomarse a la ligera, en cambio, la denuncia de Tatrana Clouthier. Intentaron sacarla de la carretera, ~~en~~ lo que condujo a la familia a reactivar su sospecha de que su padre, el candidato presidencial panista de 1988, muriera no en un accidente sino en un atentado.



■ PLAZA PUBLICA

Miguel Angel Granados Chapa

- Elecciones discutidas
- Tamaulipas y Sinaloa

Los procesos electorales no concluyen el día en que se recibe el voto de los ciudadanos. Esa lección elemental de derecho público tiene, en México, no sólo el sentido de que luego de la jornada electoral siguen los cómputos y la calificación, sino que dadas ciertas circunstancias se generan tam-

bién secuelas marcadas por diversas suertes de insurrección civil. De ese modo, más que en Puebla, en Tamaulipas y Sinaloa apenas estamos entrando en la difícil fase final del proceso para sustituir a los gobernadores Américo Villarreal Guerra y Francisco Labastida Ochoa.

Las condiciones de ambas entidades son diversas. En Tamaulipas se plantea el conflicto de manera más aguda, porque la oposición consiguió presencia derivada de que dos partidos, el PAN y el PRD, se coaligaron para presentar la candidatura de Jorge Cárdenas González, un ex paramista, que atrajo a su postulación a un importante número de sus antiguos correligionarios. Alcalde de Matamoros, cuando se vio que sus posibilidades crecían se le quiso intimidar, y detener en su aspiración política, mediante la amenaza de un juicio político, por presunta desviación de fondos. Fue tan absurda la maniobra que se hizo obligado desmon-

tarla, para que no resultara favorable a la víctima. Por la importancia de la movilización obtenida, se diría que la situación tamaulipeca pudiera asemejarse a la de entidades donde el candidato declarado triunfante no pudo sentarse a gobernar. Pero en ninguno de los casos en que tal desenlace se ha producido estaba presente ningún miembro del círculo salinista más estrecho. Algo se acercaba a esa zona Ramón Aguirre, pero era más amigo del ex presidente De la Madrid que de su sucesor. En cambio, en Tamaulipas, el candidato priísta goza del afecto del presidente Salinas, que ha impulsado su carrera, al punto de convertirlo el año pasado en virtual gobernador. Lo era no sólo por la dimensión de las finanzas que manejaba, las del Pronasol, sino por las deplorables características del gobernador formal, que ha sido omiso en la mayor parte de las áreas confiadas a su gobernación, y ha cometido errores sobresalientes en los escasos caminos administrativos que ha recorrido. La cuestión

en Tamaulipas, entonces, consiste en saber cuán intensa y permanente tiene que ser la movilización ciudadana contra un gobernador cuya característica distintiva es su proximidad con el Ejecutivo federal.

Cuando el presidente Salinas reunió a los priístas que gobiernan y aspiran a gobernar, el 21 de octubre, enumeró tres causas por las cuales quedarían en riesgo de perder los puestos que ocupan o pretenden ocupar: alejamiento del pueblo, patrimonialismo e incapacidad. No se refirió en cambio, a la gran salvaguarda que acaso beneficie a los que, incurriendo en alguna de esas causales de despido, sea puesto en jaque por la oposición, que es la amistad presidencial misma. Es seguro que esa peculiaridad dará a los candidatos colocados en situación difícil, por lo menos una más prolongada capacidad para resistir.

Es distinta, en su perjuicio, la situación del candidato triunfante en Sinaloa, Renato Vega Alvarado. No sólo no es

amigo personal del Presidente, sino que ni siquiera se ubica en la corriente modernizadora que encabeza el huésped principal de Los Pinos. Lo beneficiará, en cambio, que la oposición no se ha unificado allí, y que la movilización panista se localiza en dos de las grandes ciudades sinaloenses —Culiacán y Mazatlán—, aunque aparezcan brotes significados en otros lugares. Emilio Goicochea, el candidato panista, sin arraigo suficiente en el puerto mencionado, dista de ser el caudillo que, en Tamaulipas, se encarna en la compleja personalidad de Cárdenas González. Al contrario, es previsible que si sus impugnaciones no gozan de fortuna, se retire a sus negocios, en vez de encabezar una lucha de suerte incierta, que supone desgastes y aun sacrificios.

No puede tomarse a la ligera, en cambio, la denuncia de Tatiana Clouthier. Intentaron sacarla de la carretera, lo que condujo a su familia a reactivar su sospecha de que su padre, el candidato presidencial panista en 1988, muriera no en un accidente sino en un atentado.